



Boletín Oficial

PROVINCIA DE ORENSE.

Se publica los martes, jueves y sábados de cada semana.—Se suscribe en la imprenta de D. Pedro Lozano, Calle de San Pedro núm. 14, á 80 rs. al año para esta Capital, y 96 para fuera franco de porte por trimestres adelantados.

PARTE OFICIAL.

PRIMERA SECCION.

MINISTERIOS.

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.

S. M. la Reina nuestra Señora (Q. D. G.) y su augusta Real familia continúan sin novedad en su importante salud.

ARTICULO DE OFICIO.

GOBIERNO DE PROVINCIA.

Número 553.

En la Gaceta de Madrid correspondiente al día 12 de Noviembre, núm. 1,773, se lee lo siguiente:

MINISTERIO DE LA GUERRA.

REALES DECRETOS.

Conformándose con lo propuesto por el Presidente del Consejo de Ministros y Ministro de la Guerra, de acuerdo con el parecer del mismo Consejo, Vengo en decretar lo siguiente:

Artículo 1.º Se anula mi decreto de 5 de Agosto de 1854 restableciendo la Intendencia general militar.

Art. 2.º Se declara en su fuerza y vigor el de 29 de Diciembre de 1852 por el que tuve á bien crear la Dirección general de Administración militar á cargo de un General.

Art. 3.º El Ministro de la Guerra queda encargado de proponer y emitir los reglamentos y ordenes especiales que juzgue convenientes para perfeccionar los servicios de que está encargado el cuerpo administrativo del ejército.

Dado en Palacio á once de Noviembre de mil ochocientos cincuenta y siete.—Está rubricado de la Real mano.

—El Presidente del Consejo de Ministros y Ministro de la Guerra, Francisco Armero.

Atendiendo á las circunstancias que concurren en el Mariscal de Campo D. Francisco de Paula Vassallo, Vengo en nombrarle Director general de Administración militar.

Dado en Palacio á once de Noviembre de mil ochocientos cincuenta y siete.—Está rubricado de la Real mano.

—El Presidente del Consejo de Ministros y Ministro de la Guerra, Francisco Armero.

MINISTERIO DE MARINA.

Exposición á S. M.

SEÑORA: El Ministro que suscribe, llamado por V. M. para coniarle el despacho de los negocios de Marina, no correspondería dignamente, según su conciencia, al deber que le impone este cargo, si no consultara ante lo lo á su soberana resolución la imperiosa necesidad de reformar radicalmente la Administración central y superior del ramo, cual lo reclama de algunos años á esta parte el orden de los servicios que le pertenecen.

La Secretaría del despacho, en su antigua organización, acomodada á la existencia de otra autoridad militar y facultativa, en quien por las ordenanzas y reglamentos residía el mando y dirección de los cuerpos é institutos de la Armada, no es compatible con el régimen que emana del principio que declara Jefe superior y único responsable de los intereses marítimos al Ministro.

Siendo en este ramo todo facultativo y gerárquico, y la base antigua de la Secretaría del despacho, dotaria de Oficiales meramente idóneos para la instrucción y despacho de los expedientes, sin otro carácter de autoridad y ciencia en las materias de los respectivos negocios, fué constante la necesidad de sostener este régimen tradicional á costa de traer eventualmente á ella algunos Jefes de la Armada; y de una frecuente variación en la forma y atribuciones de la Dirección general, Almirantazgo ó Juntas que reasumieron el elemento facultativo y la inspección que correspondió á los puestos altos en la carrera.

La experiencia ha demostrado ser

embarazosas en la Marina dos Autoridades para un mismo objeto; y la marcha constante de la Secretaría del Despacho, en continuo roce y propensión contraria á todas las atribuciones que se conceden é imponen en la escala gubernativa, ha hecho reconocer que allí, en el mismo Ministerio deben residir los conomientos y radicarse en efecto las atribuciones para el acertado y expedito despacho de los negocios, sin invertir ni perturbar la legítima responsabilidad de las funciones.

Bien meditada una reforma tan grave, como que de su acierto depende el porvenir de la administración; tomando en cuenta la necesidad de centralizarla garantiendo el Ministro su responsabilidad con el consejo de personas autorizadas que la compartán, el que suscribe tiene el honor de someter á la Real aprobación de V. M. el adjunto proyecto de decreto.

Madrid, 11 de Noviembre de 1857.
—SEÑORA.—A L. R. P. de V. M.—José María de Bustillo.

REALES DECRETOS.

En atención á lo que Me ha expuesto el Ministro de Marina, de acuerdo con el parecer del Consejo de Ministros, Vengo en decretar lo siguiente:

Art. 1.º Se suprimen la Dirección general de la Armada y demás dependencias anejas á ella, creadas ó restablecidas por Real decreto de 7 de Noviembre de 1856.

Art. 2.º El Ministerio de Marina reasumirá en adelante las facultades y atribuciones de todas las dependencias suprimidas.

Art. 3.º Para el despacho de los negocios que han radicado hasta ahora en la Secretaría del Ministerio de Marina y Dirección general de la Armada se crean á las inmediatas órdenes del Ministro del ramo las dependencias siguientes:

Junta directiva del Ministerio de Marina.

Junta consultiva de la Armada.

Dirección de armamentos, expediciones y pertrechos.

Dirección de Ingenieros de Marina.

Dirección de matriculas de mar y de personal de tripulaciones.

Dirección del personal.

Dirección de artillería é infantería de Marina.

Dirección de Contabilidad de Marina y del cuerpo administrativo de la Armada.

Secretaría del Ministerio de Marina.

Art. 4.º Los negociados que competen á cada una de dichas dependencias,

su personal, atribuciones y demás puntos relativos á su organización y régimen se hallan consignados en el reglamento que he tenido á bien aprobar con esta fecha.

Dado en Palacio á once de Noviembre de mil ochocientos cincuenta y siete.—Está rubricado de la Real mano.
—El Ministro de Marina, José María de Bustillo.

Con arreglo á lo dispuesto en Real decreto de esta fecha, y á propuesta del Ministro de Marina, Vengo en nombrar Presidente de la Junta consultiva de la Armada al Jefe de escuadra Don José María Halcon, y Vocales á los de igual graduación D. Cristóbal Mallén y D. Joaquín Gutiérrez de Rubalcava.

Dado en Palacio á once de Noviembre de mil ochocientos cincuenta y siete.—Está rubricado de la Real mano.
—El Ministro de Marina, José María de Bustillo.

De conformidad con lo que Me ha propuesto el Ministro de Marina, y en virtud de lo prevenido en el Real decreto de esta fecha, Vengo en nombrar Director del ramo de Ingenieros en el Ministerio de Marina al Jefe de escuadra é Ingeniero general de la Armada D. José Soler; Director de artillería é infantería de Marina, al Brigadier D. Eusebio Salcedo; Director de armamentos, expediciones y pertrechos, al Brigadier D. José Manuel Pereja; Director del personal, al Brigadier D. Guillermo Chacon; Director de matriculas de mar y de personal de tripulaciones, al Capitán de navío D. José María Vazquez, y Director de Contabilidad de Marina y del Cuerpo administrativo de la Armada, al Comisario Ordenador D. José María Ortiz.

Dado en Palacio á once de Noviembre de mil ochocientos cincuenta y siete.—Está rubricado de la Real mano.—El Ministro de Marina, José María de Bustillo.

En virtud de lo dispuesto en Real decreto de esta fecha, Vengo en nombrar Oficial primero de la Secretaría del Ministerio de Marina á D. Marcelino Travieso, Auditor de Marina cesante.

Dado en Palacio á once de Noviembre de mil ochocientos cincuenta y siete.—Está rubricado de la Real mano.

El Ministro de Marina, José María de Bustillo.

Como consecuencia de la nueva forma dada á las dependencias del Ministerio de Marina por Real decreto de esta fecha, Vengo en relevar á D. Juan Salomón, Ministro suplente del Supremo Tribunal de Guerra y Marina, del cargo de Oficial mayor del referido Ministerio que desempeñaba en comisión, quedando satisfecha del celo é inteligencia con que lo ha servido.

Dado en Palacio á once de Noviembre de mil ochocientos cincuenta y siete. — Está rubricado de la Real mano. — El Ministro de Marina, José María de Bustillo.

Como resultando de la nueva organización dada á las dependencias del Ministerio de Marina por Real decreto de esta fecha, Vengo en declarar cesantes, con el haber que por clasificación les corresponde, á los Jefes de sección del referido Ministerio D. Pedro de Palacio y D. Carlos de Aguilera; á los Oficiales primeros D. Maximino de Torres y D. José de Ocío; á los Oficiales segundos D. Felipe Ramos Izquierdo y D. Ventura de Obregon, y al Oficial tercero D. Eduardo Vila; y en disponer que el Capitán de infantería de marina D. Juan Bautista Micheo y el Teniente de navío Don Casto Méndez Núñez, que desempeñaban en comisión los cargos de Oficiales segundo y tercero del mismo Ministerio, se incorporen á la Armada para continuar en ella sus servicios.

Dado en Palacio á once de Noviembre de mil ochocientos cincuenta y siete. — Está rubricado de la Real mano. — El Ministro de Marina, José María de Bustillo.

Suprimida por Real decreto de esta fecha la Dirección general de la Armada, Vengo en resolver, de acuerdo con el dictamen del Ministro de Marina, lo siguiente:

Artículo 1.º El Capitán general de la Armada usará en adelante de la prerrogativa concedida al Director general de la misma en las Ordenanzas navales de 1797, de poner su *camplase* en todos los títulos, patentes y nombramientos que Yo expidiere para empleos de cualquiera de los ramos dependientes del Ministerio de Marina.

Art. 2.º Tendrá también el referido Capitán general la facultad de presidir, siempre que lo estime conveniente, la Junta consultiva del ramo creada por Real decreto de este día, y la de inspeccionar en los mismos términos todos los cuerpos, buques, arsenales é institutos de la Armada.

Art. 3.º Elegirá un Oficial de las clases de Capitán de fragata ó Teniente de navío, que á sus inmediatas órdenes desempeñe las funciones de Ayudante Secretario, y por este encargo se le abonará el sobresueldo anual de 3,000 rs.

Dado en Palacio á once de Noviembre de mil ochocientos cincuenta y siete. — Está rubricado de la Real mano. — El Ministro de Marina, José María de Bustillo.

En atención á las recomendables circunstancias que concurren en el Jefe de escuadra D. José Soler, Vengo en nombrarle Ingeniero general de la Armada con asignación á la escala especial del mismo ramo.

Dado en Palacio á once de Noviembre de mil ochocientos cincuenta y siete. — Está rubricado de la Real mano. — El Ministro de Marina, José María de Bustillo.

REAL ORDEN.

Excmo. Sr.: La Reina (Q. D. G.) se ha dignado promover á Jefe de escuadra de la Armada á los Brigadieres D. José Soler, D. Cristóbal Mallon, D. Segundo Díaz de Herrera y á Joaquín Gutiérrez de Rubalcava; y á Brigadieres á los Capitanes de navío D. Rafael Tavera y D. Blas García de Quesada.

Dígoles á V. E. de Real orden para su noticia y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid, 11 de Noviembre de 1857. — Bustillo. — Sr. Director general accidental de la Armada.

Lo que se inserta en el Boletín oficial para conocimiento del público. Ocase 16 de Noviembre de 1857. — El Gobernador, Pablo de Uriu.

Número 554.

En la Gaceta, núm. 1,754, se lee lo siguiente:

MINISTERIO DE FOMENTO.

REALES DECRETOS.

Visto el expediente instruido ante el Gobernador de Valencia para la formación de una sociedad anónima que con el título de *Compañía valenciana de Seguros marítimos* y el capital de 20 millones de reales, divididos en 4,000 acciones de á 5,000 rs., se propone por objeto el ramo de seguros marítimos en toda su extensión:

Vistas las disposiciones del Código de Comercio relativas á las sociedades anónimas, la ley de 28 de Enero de 1848 y el reglamento de 17 de Febrero dictado para su ejecución:

Considerando que por parte de los fundadores de la citada sociedad se han llenado todos los requisitos prevenidos por dichas leyes, y que se ha acreditado además en debida forma haberse hecho efectivo el importe del primer dividendo determinado por el Gobierno, completando la suscripción del total de las acciones en que se halla dividido el capital social;

Dado el Consejo Real y de conformidad con su dictamen, Vengo en autorizar la constitución definitiva de la expresada sociedad bajo la denominación de *Compañía valenciana de Seguros marítimos*, y en autorizar á su administración para que dentro del término de 30 días, contados desde la publicación de este decreto, pueda dar principio á sus operaciones.

Dado en Palacio á siete de Octubre de mil ochocientos cincuenta y siete. — Está rubricado de la Real mano. — El Ministro de Fomento, Claudio Moyano.

Visto el expediente instruido en el Gobierno de Barcelona para la formación de una sociedad anónima que, con el título de *La Esperanza de seguros marítimos* y el capital de 20 millones de reales, divididos en 2,000 acciones de á 10,000 rs., se propone por objeto el ramo de seguros marítimos en toda su extensión, y también el de poder asegurar contra incendios toda clase de efectos almacenados en la expresada ciudad, siempre que lo acuerde la Junta inspectora de la compañía á propuesta de la Dirección de la misma:

Vistas las disposiciones del Código de Comercio que hacen relación á las sociedades anónimas, la ley de 28 de Enero de 1848 y el reglamento de 17 de Febrero siguiente dado para su ejecución:

Considerando que por parte de los fundadores de esta proyectada sociedad se han llenado todos los requisitos prevenidos por dichas leyes y reglamento, y que, después de haber ajustado sus estatutos á lo prescrito en la Real orden de 30 de Julio último, han verificado los suscriptores el desembolso del 10 por 100 del importe total de sus acciones determinado por el Gobierno.

Considerando que, no obstante haberse practicado la reforma anteriormente indicada, es preciso que la denominación de la sociedad guarde conformidad y exprese todos los objetos de su fundación:

Oído el Consejo Real y de acuerdo con su dictamen, Vengo en autorizar la constitución definitiva de la mencionada sociedad con la denominación de *La Esperanza de Seguros marítimos y contra incendios*, autorizando á su administración para que dentro del término de 30 días, contados desde el de la publicación de este decreto, pueda dar principio á sus operaciones.

Dado en Palacio á siete de Octubre de mil ochocientos cincuenta y siete. — Está rubricado de la Real mano. — El Ministro de Fomento, Claudio Moyano.

Obras públicas.

Ilmo. Sr.: S. M. la Reina (Q. D. G.), de acuerdo con lo informado por la Junta consultiva de Caminos, Canales y Puertos, ha tenido á bien autorizar á D. José Flores para que, sin perjuicio de los derechos de propiedad de cualquiera otro interesado, aproveche las aguas del río Ter como motor de un establecimiento industrial que se propone construir en el término de Sarriá, provincia de Gerona, con arreglo á las condiciones siguientes:

Primera. La presa no podrá exceder de un metro de altura sobre el fondo del río.

Segunda. Las obras se verificarán con arreglo al proyecto aprobado y bajo la inspección del Ingeniero de la provincia.

Tercera. La presente autorización no da derecho á indemnización alguna al interesado en el caso en que se verifique la rectificación del río.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y efectos consiguientes. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid, 23 de Setiembre de 1857. — Moyano. — Sr. Director general de Obras públicas.

MINISTERIO DE LA GOBERNACION

Subsecretaria. — Negociado 2.º

La Reina (Q. D. G.) se ha dignado expedir el Real decreto siguiente:

«En el expediente y autos de competencia suscitada entre el Gobernador de la provincia de Valencia y el Juez de primera instancia de Villar del Arzobispo, de los cuales resulta:

Que Vicente Cervera interpuso ante el expresado Juez un interdicto en queja de que hallándose en posesión de un banca de la propiedad de su consorte, situado en la partida de los terreros del término de Bugarra, lindante con la acequia y el río, el Alcalde del mismo pueblo había mandado abrir, sin su anuencia y consentimiento, en medio del expresado banca ó peñazo de tierra, una zanja para conducir por ella el agua de la acequia, variando el antiguo cauce de esta;

Que sustanciado el interdicto, y habiendo recaído auto restitutorio, el Alcalde acudió al Gobernador para que requiriese de inhibición al Juez, expresando que la zanja se había abierto porque en vista de que, á pesar de haberse mandado que los vecinos que tuvieran tierra-huerta en los terrenos de la acequia se presentasen á la limpia de la misma, no concurrió Cervera, fue preciso dar á las aguas dirección por un peñazo de su heredad, inculco hace 11 años:

Que el Gobernador, sin oír al Consejo provincial, requirió de inhibición al Juez, y este procedió á sustanciar el artículo de competencia y sin celebrar vista sobre la misma dió auto declarándose competente, de lo cual resultó el conflicto de que se trata.

Vista la Real orden de 23 de Marzo de 1855, que prescribe que al entablar los Gobernadores competencia con el carácter administrativo, oigan previamente al cuerpo provincial:

Vista la disposición 9.ª del Real decreto de 4 de Junio de 1847, que establece que el Juez ó Tribunal requerido, después de comunicar el exhorto del Gobernador al ministerio fiscal y á las partes, celebrará vista, con citación de estas y del propio ministerio fiscal, del artículo de competencia antes de proveer auto sobre la misma:

Considerando que ni el Gobernador de Valencia ha oído al Consejo provincial para entablar esta contienda, según lo dispuesto en la Real orden primero citada, ni el Juez de Villar del Arzobispo ha celebrado vista del artículo de competencia, con arreglo á lo prevenido en la disposición 9.ª además citada del Real decreto de 4 de Junio de 1847;

Oído el Consejo Real, Vengo en declarar mal formada esta competencia, y que no ha lugar á decidirla.

Dado en Palacio á siete de Octubre de mil ochocientos cincuenta y siete. — Está rubricado de la Real mano. — El Ministro de la Gobernación, Cándido Nocedal.

De Real orden lo comunico á V. S., con devolución del expediente, para su inteligencia y demás efectos. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 8 de Octubre de 1857. — Nocedal. — Sr. Gobernador de la provincia de Valencia.

Excmo. Sr.: Remitido á informe de las Secciones de Gracia y Justicia y Gobernación del Consejo Real el expediente de autorización para procesar á D. Lorenzo Medina, Alcalde que fué de Aldeire, han consultado lo siguiente:

«Estas Secciones han examinado el expediente, en virtud del cual el Gobernador de la provincia de Granada ha negado al Juez de primera instancia de Guadix la autorización que solicitó para procesar á D. Lorenzo Medina, Alcalde que fué de Aldeire.

De este expediente resulta: que denunciado tres veces el ganado de Juan José de Yanguas, vecino de Liscalhorra, por estar pastando en terrenos del distrito municipal de Aldeire, el Alcalde de este punto impuso á aquel vecino la multa de 120 rs. vn., 40 por cada una de las transgresiones cometidas, notificándole por medio del Alcalde de su vecindad.

Que Yanguas, á causa, según dice, del mal estado de su salud, y del recio temporal que se experimentaba, no se presentó á satisfacer la multa hasta 10 días después de aquel en que se le había notificado; y entonces lo verificó acudiendo á casa del Secretario del Ayuntamiento, y ofreciendo con voces descompuestas según el mismo Secretario asegura, la indicada cantidad en metálico al Alcalde que allí se encontraba.

Que habiéndose este resistido á admitirla, porque lo que deseaba era el pa-

pel de multas correspondiente, Yanguas contestó, según el mismo dice, que ni lo tenía ni lo imprimía; después de lo que á ruegos del Secretario que deseaba evitar todo altercado, tomó el Alcalde el dinero y lo entregó á este mismo, que así afirma en su declaración para que enviase á la ciudad por el papel correspondiente, puesto que en el pueblo no se encontraba.

Que así se hizo, remitiéndose la mitad del papel recortado á la Administración de Hacienda pública de la provincia; y no habiendo sido posible entregar la otra mitad al Intendente Yanguas, aun cuando se le remitió por medio de un alguacil, porque no le obrieron á este la puerta de la casa, según dice el Secretario del Ayuntamiento, se dió conocimiento de este suceso al Escribano D. Francisco Morales:

Que Yanguas acudió al Juez de primera instancia de Guadix en queja contra la providencia del Alcalde, que calificaba de fraude, exacción ilegal y estafa, porque no ta ha precedido juicio de ninguna especie, por mas que sean exactos los hechos que la motivaron; ni fué cobrada la multa en el papel correspondiente, que dice no podía tener dispuesto por que ignoraba la condena; á pesar de haber transcurrido 10 días desde su notificación hasta el cumplimiento de la misma.

Que después de varios incidentes en la tramitación de estos autos, consultados á la Audiencia territorial, se recibió á instancia de Yanguas una información de testigos; tres de ellos presentados por el mismo; y de sus declaraciones, así como de la del Secretario del Ayuntamiento y de los escritos del mismo Yanguas, aparece cuanto queda expuesto:

Que en este estado del negocio, el Juez, á consecuencia de lo que también había acordado la Audiencia, pidió al Gobernador de la provincia la autorización necesaria para procesar al Alcalde de Aldeire; y le fué negada fundándose aquel funcionario, de conformidad con lo expuesto por el Consejo provincial, en que el Alcalde había usado de sus atribuciones como Autoridad administrativa, y habiendo adquirido inmediatamente el papel correspondiente á la multa impuesta, remitió la mitad á la Administración de Hacienda pública, dando parte de todo al Gobierno de la provincia:

Visto el párrafo quinto del art. 74 de la ley de organización y atribuciones de los Ayuntamientos, según el cual corresponde á los Alcaldes cuidar de todo lo relativo á policía rural:

Visto el art. 75 de la misma ley, que confiere á los Alcaldes la facultad de aplicar gubernativamente las penas señaladas en las leyes y reglamentos de policía y en las ordenanzas municipales, é imponer y exigir multas cuyo máximo es la cantidad de 100 rs. vn. en los pueblos que no lleguen á 500 vecinos.

Visto el Real decreto de 8 de Agosto de 1851, que previene en su art. 53 que todas las multas que se impongan judicial ó gubernativamente por delitos, faltas ó contravención á las leyes, aranceles, reglamentos, bandos ú órdenes de las Autoridades, serán exigidas precisamente en papel del llamado «de multas», y de ninguna manera en metálico; debiendo considerarse comprendidos en los artículos 317 y 318 del Código penal los que las exigieren en dinero:

Vistos estos mismos artículos que establecen las penas que han de imponerse al empleado público que sin autorización competente impusiere una contribución ó arbitrio, fuese esto ó no en provecho propio:

Considerando: 1.º Que el Alcalde de Aldeire, imponiendo gubernativamente una multa á D. Juan José Yanguas por las faltas cometidas, obró estrictamente dentro del círculo de sus atribuciones

como Autoridad administrativa, al tenor de lo dispuesto en la citada ley.

2.º Que no aparece se extralimitar en cuanto á la manera de exigir esta multa, porque no precediera á su imposición ó exacción ningún juicio; puesto que esta formalidad no es necesaria procediendo, como procedía, el Alcalde gubernativamente; ni aun para atender al extremo de hacer constar la exactitud de los hechos, toda vez que el penado no los niega; y antes bien se ha conducido siempre en este negocio partiendo del supuesto de que las denuncias eran exactas.

3.º Que tampoco puede fundarse la extralimitación en que la multa haya sido exigida en metálico; puesto que consta por confesión del mismo penado que el Alcalde la exigió en el papel correspondiente, resistiéndose á recibir cantidad alguna en metálico, y que solo por no haber en el pueblo el papel que se necesitaba y para evitar todo altercado á que pudiera dar lugar la censurable conducta del Yanguas, consintió en tomar la cantidad en metálico, y la entregó en seguida al Secretario para que enviase á buscar el papel correspondiente, como en efecto se hizo.

4.º Que esto supuesto, no es posible la aplicación al negocio presente del artículo citado del Real decreto de 8 de Agosto de 1851, que se refiere al caso en que sean las multas exigidas en dinero; ni tampoco los artículos también citados del Código penal; puesto que no se ha cometido ninguna exacción indebida ni en provecho propio;

Las Secciones opinan que debe confirmarse la negativa acordada por el Gobernador de Granada:

Y habiéndose dignado S. M. la Reina (Q. D. G.) resolver de conformidad con lo consultado por dichas Secciones, de Real orden lo comunico á V. E. para su inteligencia y efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid, 3 de Octubre de 1857.—Nocheal.—Señor Gobernador de la provincia de Granada.

Lo que se inserta en este Boletín para conocimiento del público. Orense 16 de Noviembre de 1857.—El Gobernador, Pablo de Uria:

Número 555.

En la Gaceta núm. 1,749 se lee lo siguiente:

MINISTERIO DE LA GOBERNACION.

Subsecretaria.—Negotio 2.º

Excmo. Sr.: Remitido á informe de las Secciones de Gracia y Justicia y Gobernación del Consejo Real el expediente de autorización para procesar á Don Pedro Antonio Saavedra, Alcalde que fué de la villa de Mula, han consultado lo siguiente:

«Estas Secciones han examinado el expediente en que el Juez de primera instancia de Mula pide autorización para proceder contra D. Pedro Antonio Saavedra, Alcalde que fué de la expresada villa:

Resulta que en 3 de Octubre de 1855 D. Pedro Antonio Saavedra presentó á la Diputación provincial cuenta de las cantidades que le habían sido libradas por la Depositaria de provincia para la esplanación del camino vecinal que de dicha villa conduce á la de Cieza, determinando la parte invertida en las obras puestas bajo el cuidado del Director de caminos vecinales del distrito, D. Agustín Aguilar, cuya inversión aparece suscrita por éste funcionario á importe 7,456 rs., y acompañando una carta de pago que acredita la devolución de 6,544 rs., resto de los 14,000 entregados para la esplanación del camino.

La Diputación, en 29 de Octubre del mismo año, devolvió las cuentas al Ayuntamiento porque le parecían muy subidos los precios de las herramientas construidas, y excoyó también el número de astiles y capazos que se suponían gastados, á fin de que la corporación municipal expusiera lo que le pareciera, y para que se cotejase la firma del Director D. Agustín J. de Aguilar, presentándose éste, y en el caso de que no se supiera su paradero, cotejándola con otra suya indubitada.

El Ayuntamiento nombró peritos que reconociesen la firma expresada y la de Lorenzo Puerta, que había intervenido en los trabajos como maestro herrero, cuya firma creía el Ayuntamiento ser falsa, y que se examinasen las personas que aparecían haber recibido cantidades según las cuentas.

El Ayuntamiento formó expediente gubernativo en averiguación de los hechos. En él declararon 10 testigos, y de ellos unos manifestaron no ser cierto que se hubiesen llevado al camino más que seis picazas por cuenta del Alcalde, pues las demás herramientas las llevaban los trabajadores; que tampoco se les daban capazos; que no era cierto se hubiesen satisfecho los jornales que en las cuentas aparecían, pues los trabajadores iban por tanda vecinal, y por consiguiente no cobraban jornal.

Confrontadas por peritos las firmas del Director de caminos vecinales D. Agustín Aguilar y de Lorenzo Puerta, maestro herrero, con otras indubitadas, manifestaron estar ambas suplantadas.

El Ayuntamiento informó en su consecuencia que era falsa la construcción de herramientas de que el Alcalde se databa en sus cuentas; falsa la partida de capazos; pues consta que los trabajadores los llevaban; falsa la cuenta que aparece rendida en nombre de D. Agustín Aguilar, y desentendiéndose por las declaraciones de los interesados que algunos de los que figuran en las listas hubiesen trabajado en el camino los días que se supone.

En su vista, por el Gobernador, á quien pasaron las actuaciones, fueron estas remitidas al Juez de primera instancia para que procediera á lo que hubiera lugar.

Practicáronse algunas nuevas diligencias en el Juzgado, en que se confirmaron los hechos antes enunciados; se mandó proceder contra D. Agustín Aguilar, y se pidió autorización para proceder contra D. Pedro Antonio Saavedra.

Visto el art. 223 del Código penal; en que se impone á las penas de cadena temporal y multa al empleado público que abusan lo de su oficio cometiendo falsedad contrabando ó ligiéndose letra, firma ó rúbrica, y suponiendo en un acto la intervención de personas que no la han tenido:

Visto el capítulo 14, libro 5.º, título VIII del mismo Código, en que se trata de la malversación de caudales públicos:

Considerando que existen en el expediente datos bastantes para presumir que en las cuentas presentadas á la Diputación provincial de Murcia por D. Pedro Antonio Saavedra se cometieron delitos de suplantación de firmas y malversación de caudales, delitos que no pueden robustecerse ni destruirse sino en un juicio seguido conforme á derecho ante los Tribunales de justicia:

Considerando que en el hecho de haber pasado el Gobernador la causa al Juez para que procediese á lo que hubiera lugar, conforme á derecho, implícitamente le autorizó para que conociera en ella;

Opinan pudiera V. E. servirse consultar á S. M. es innecesaria la autorización.

Y habiéndose dignado S. M. la Reina (Q. D. G.) resolver de conformidad con lo consultado por dichas Secciones, de Real orden lo comunico á V. E. para su inteligencia y efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid, 12 de Octubre de 1857.—Cándido Nocedal.—Sr. Ministro de Gracia y Justicia.

Lo que se inserta en el Boletín oficial para conocimiento del público. Orense 16 de Noviembre de 1857.—El Gobernador, Pablo de Uria.

Número 556.

En la Gaceta, núm. 1,733, se lee lo siguiente:

MINISTERIO DE LA GOBERNACION.

REALES DECRETOS.

Accediendo á los deseos que por razón de su edad ha manifestado el Conserjero Real ordinario D. Antonio Gil de Zárate; Vengo en relevarle del cargo de Subsecretario del Ministerio de la Gobernación; cuyas funciones ha continuado ejerciendo en comisión en virtud de mi Real decreto de 12 de Noviembre último, quedando muy satisfecha del celo, lealtad é inteligencia con que lo ha desempeñado.

Dado en Palacio á veinte y siete de Octubre de mil ochocientos cincuenta y siete.—Está rubricado de la Real mano.—El Ministro de la Gobernación, Manuel Bermúdez de Castro:

En atención á las especiales circunstancias que concurren en D. Manuel Moreno Lopez, Consejero Real ordinario; Vengo en resolver que se encargue en comisión de la Subsecretaría del Ministerio de la Gobernación, por contener así al mejor servicio, conservando en propiedad la plaza que ocupó en el Consejo:

Dado en Palacio á veinte y siete de Octubre de mil ochocientos cincuenta y siete.—Está rubricado de la Real mano.—El Ministro de la Gobernación, Manuel Bermúdez de Castro.

Lo que se inserta en el Boletín oficial de esta provincia para conocimiento del público. Orense 16 de Noviembre de 1857.—El Gobernador, Pablo de Uria:

ORDENANZA PARA LA CONSERVACION Y POLICIA DE LAS CARRETERAS GENERALES.

(Conclusión.)

Art. 19. Los artieros y conductores de carruajes que hicieren dueño y den de comer á sus ganados en el camino ó sus paseos, sufrirán la multa de veinte reales por cada carruaje y de cuatro reales por cada caballería ó cabeza de ganado, además de pagar cualquiera perjuicio que causaren.

Art. 20. La pena establecida en el artículo anterior es aplicable á los dueños y pastores de cualquiera ganado, aunque sea mesteño que estuviere pastando en las alamedas, prados, cunetas y oscarpos del camino:

ADMINISTRACION PRINCIPAL
DE HACIENDA PUBLICA DE LA PROVINCIA DE
ORENSE.

Territorial y Subsidio.

CIRCULAR.

Siendo ya repetidas las quejas que los recaudadores generales de contribuciones de la provincia están reproduciendo a esta Administracion por los obstáculos que a sus delegados ofrecen en la cobranza varios Alcaldes, denegándoles los unos los auxilios legales que impetran de su autoridad, llegando al extremo otros de no reconocerlos mientras que sus nombramientos no contengan la sancion de esta oficina, dando lugar con tan perniciosos almos a diferir la accion cobratoria en las épocas designadas como tan perentorias para cumplimentar tan sagrado objeto, he dispuesto para conocimiento de los que pudiesen alegar alguna duda en el cumplimiento de sus deberes, las observaciones siguientes:

1.º Siendo los recaudadores generales los únicos responsables a la Hacienda para hacer efectivas en sus arcas el importe de las contribuciones de Territorial y de Subsidio, conforme a lo dispuesto por el art. 61 del Real decreto de 25 de Mayo de 1845 e Instruccion de 5 de Setiembre de 1847, a los Alcaldes incumba facilitarles los auxilios legales que les exijan, incurriendo en la responsabilidad que marca el caso 3.º de la ley municipal de 8 de Enero de 1845 y la de presupuestos de 25 del siguiente Mayo, los que faltando al cumplimiento de sus deberes contrarian o entorpezcan aquellas disposiciones.

2.º Como de la incumbencia exclusiva de los mismos recaudadores el nombramiento de los agentes o delegados en los distritos para hacer la cobranza, conforme a las facultades que les están concedidas por el artículo 22, capítulo 3.º de la Real Instruccion de 5 de Setiembre de 1845, a nadie cabe impugnar las personas en quienes recaigan dichos nombramientos, previo el conocimiento que los referidos recaudadores deben dar de las mismas, siempre que sus procedimientos u otra causa especial no diese suficiente motivo para invalidarlas. En su virtud, confiada la Administracion de que los señores Alcaldes penetrando de que cualquiera infraccion que pudiesen cometer en el cumplimiento de una ley les ocasiona graves responsabilidades que en su mano está evitar, y que está resuelta a exigirles donde existan, no duda la relevación del disgusto que pudiera haberle, si como no es de esperar se reprodujesen quejas de esta especie que tanto tienden a entorpecer la cobranza. Orense 15 de Noviembre de 1857. Luis Romero.

ORENSE.—1857.

PEDRO LOZANO.

IMPRENTA DEL GOBIERNO OFICIAL.

Calle de S. Pedro, núm. 14.

Art. 21. En el camino, sus paseos y márgenes ninguno podrá poner tinglados o puestos ambulantes, aunque sean para la venta de comestibles sin la licencia correspondiente.

Art. 22. Delante de las posadas ni en otro paraje alguno del camino podrá dejarse ningún carruaje suelto, y al dueño o conductor del que así se encontrare, se le impondrá una multa de veinte a cincuenta reales. En igual pena incurrirá toda persona que eche animales muertos sobre el camino o a menor distancia de treinta varas de sus márgenes, además de tener la obligacion de sacarlos fuera.

Art. 23. Las caballerías, recuas, ganados y carruajes de toda especie deberán dejar libre la mitad del camino a lo ancho para no embarazar el tránsito a los demás de su especie; y al encontrarse en un presto los que van y vienen, marcharán arrimándose cada uno a su respectivo lado derecho.

Art. 24. A los arrieros que llevando mas de dos caballerías reatadas caminaren piteados se les multará en veinte reales de vellón a cada uno; y si fuesen carruajes los que así caminen, se exigirá igual cantidad por cada uno.

Art. 25. Cuando en cualquier paraje del camino las recuas y carruajes se encontraran con los conductores de la correspondencia pública, deberán dejar a estos el paso expedito; las contravenciones voluntarias de la presente disposicion se castigarán con una multa de veinte a cincuenta reales.

Art. 26. Bajo la multa establecida en el artículo anterior, a ninguno será permitido correr a escape en el camino, ni llevar de este modo caballerías, ganados y carruajes a la inmediacion de otros de su especie o de las personas que van a pie.

Art. 27. Igual multa se aplicará a los arrieros y conductores cuyas recuas, ganados y carruajes vayan por el camino sin guia o persona que los conduzca.

Art. 28. En las cuestas marcadas, segun la dispuesto en el artículo 15, no podrán bajar los carruajes sino con plancha u otro aparato que disminuya la velocidad de sus ruedas; y al que faltare a esta disposicion llevando pasajeros, se le impondrá de cincuenta a doscientos reales de multa.

Art. 29. En las noches oscuras los carruajes que vayan a la ligera, sin excepcion alguna, deberán llevar en su frente un farol encendido, imponiéndose la multa de treinta reales a los conductores por cada vez que contravengan a esta prevencion.

CAPITULO III.

De las obras contiguas a las carreteras.

Art. 30. En las fachadas de las casas contiguas al camino no podrá ejecutarse ni poner cosa alguna colgante o saliente que pueda ofrecer incomodidad, riesgo o peligro a los pasajeros o a las caballerías y carruajes. Los Alcaldes cuando reciban denuncias por dicha causa señalarán un breve termino para que se quiten los estorbos, imponiendo una multa de

veinte a ochenta reales al que no lo hiciere en el tiempo señalado.

Art. 31. Cuando las casas o edificios contiguos al camino, y en particular las fachadas que confronten con él, amenacen ruina, los Alcaldes darán aviso inmediatamente al Ingeniero encargado de la carretera por medio de los Peones camineros o de cualquier otro dependiente del Ramo para que proceda a su reconocimiento.

Art. 32. El Ingeniero deberá reconocer cualquier edificio público o privado del cual se tengan indicios de que amenaza ruina sobre el camino, y cuando alguno se hallare en este caso, lo pondrá en conocimiento del Alcalde, expresando si la ruina es o no próxima; advirtiéndole al mismo tiempo si el edificio está en virtud de alineacion aprobado, sujeto a retirar su linea de fachada, para dar mayor ensanche a la via pública.

Art. 33. Dentro de la distancia de treinta varas colaterales de la carretera, no se podrá construir edificio alguno, tal como posada, casa, corral, de ganados etc., ni ejecutar alcantarillas, rampales u otras obras que salgan del camino a las posesiones contiguas, ni establecer presas y artefactos, ni abrir cauces para la toma y conduccion de aguas sin la correspondiente licencia.

Art. 34. Las peticiones de licencia para construir o reedificar en las expresadas fajas de terreno u ambos lados del camino, se dirigirán al Alcalde del pueblo respectivo, expresando el paraje, calidad y destino del edificio u obra que se trata de ejecutar.

Art. 35. El Alcalde remitirá dichas instancias con las observaciones que estime oportunas al Ingeniero encargado de la carretera, para que previo reconocimiento señale la distancia y alineacion a que deberá sujetarse en la confrontacion del camino la obra proyectada, expresando en su caso las demas advertencias, precauciones o condiciones facultativas que deberán observarse en su ejecucion, para que no cause perjuicio a la via pública ni a sus obras, paseos y arbolados.

Los interesados estarán obligados a presentar el plano de la obra proyectada, si el Ingeniero lo creyese necesario, para dar su dictamen con el debido conocimiento.

Art. 36. Los Alcaldes en sus respectivas jurisdicciones, previo reconocimiento e informe del Ingeniero, segun lo dispuesto en el artículo anterior, concederán licencia para construir o reedificar con sujecion a la alineacion y condiciones que aquel hubiere marcado, cuidando que se observen puntualmente por los dueños de la obra.

Art. 37. A los que sin la licencia expresada ejecutasen cualquier obra dentro de las treinta varas de uno y otro lado del camino, o se apartaren de la alineacion marcada, o no observaren las condiciones con que se les hubiese concedido la licencia, les obligará el Alcalde a la demolicion de la obra, caso de perjudicar a las de la carretera, sus paseos, cunetas y arbolados.

Art. 38. Cuando se susciten contestaciones con motivo de la alineacion y condiciones facultativas señaladas por el Ingeniero en la forma y casos previstos en los artículos anteriores, el

Alcalde las pondrá en su conocimiento y suspendiendo todo procedimiento ulterior, remitirá el expediente al Gefe político de la provincia.

Art. 39. El Gefe político resolverá a la posible brevedad sobre los expedientes de que trata el artículo anterior, oyendo al Ingeniero en Gefe del distrito; pero si hallare motivo para no conformarse con el dictamen de este, los pasará sin demora a la Direccion general del Ramo para que decida lo que fuere justo y conveniente, o proponga en su caso al Gobierno la resolucion que corresponda.

CAPITULO IV.

De las denuncias por infracciones de esta Ordenanza.

Art. 40. No podrá exigirse pena alguna de las previstas en esta Ordenanza sino mediante denuncia ante los Alcaldes de los pueblos mas próximos al punto de la carretera en que fuere delatado el contraventor.

Art. 41. Las aprehensiones y denuncias podrán hacerse por cualquiera persona; deberán hacerse los dependientes de Justicia de los pueblos por donde pasa la carretera; pero corresponden con especialidad a los Peones camineros y Capataces, así como a todos los empleados de Caminos que tienen la calidad de Guardas jurados para perseguir a los infractores de la presente ordenanza.

Art. 42. Presentadas las denuncias ante los Alcaldes, procederán estos de plano y oyendo a los interesados, imponiendo en su caso las multas que van establecidas, y cumpliendo con lo prevenido en esta Ordenanza, sin omision ni demora alguna, como es de esperar de su celo por el servicio público y comodidad de los mismos pueblos.

Art. 43. De las multas que se exijan se aplicará una tercera parte al denunciador, una tercera parte del minimo de lo que en cada caso señala esta Ordenanza al Alcalde ante quien se hiciera la denuncia, y el resto a los gastos de conservacion del camino. Esta última parte se entregará al Sobrestante o Aparejador del mismo, bajo el correspondiente recibo visado por el Ingeniero encargado de la carretera.

Art. 44. Los Gefes políticos en sus respectivas provincias cuidarán de que se observen puntualmente las disposiciones contenidas en esta Ordenanza, procediendo con arreglo a la ley contra los Alcaldes que hubiesen cometido o tolerado alguna infraccion de ellas.

Art. 45. En todos los portazgos situados en todas las carreteras generales habrá fijo un ejemplar de la presente Ordenanza, otro se entregará a cada uno de los Alcaldes de los pueblos que se hallen en igual caso, y asimismo a todos los Peones camineros, y Capataces, Guardas camineros y demas empleados del Ramo de Caminos ocupados en dichas carreteras.—Es copia.—El Director general de Caminos, Canales y Puertos, Pedro Miranda.—Es Copia: